



ASOCIACION LATINOAMERICANA  
DE ORGANIZACIONES DE  
PROMOCION AL DESARROLLO A.C.

# *Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2012-2013*

*Las organizaciones y las movilizaciones sociales por la defensa de los  
recursos y bienes naturales: un desafío para la democracia y el desarrollo  
en América Latina*

## **INFORME NACIONAL PARAGUAY**

**Marcos Glauser**

**BASE-ECTA Educación, Comunicación y Tecnologías Apropriadas**

## **SIGLAS UTILIZADAS**

ADM- Archer Daniels Midland

ALOP- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C.

CAPECO- Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas

CDE- Centro de Documentación y Estudio

CIDH- Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CNOCIP- Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares

COCIP- Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay

CONAMURI- Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas

FNC- Federación Nacional Campesina

IALA- Instituto Agroecológico Latinoamericano

IDD- Informe Democracia y Desarrollo

LNC- Liga Nacional de Carperos

MAG- Ministerio de Agricultura y Ganadería

MAP- Movimiento Agrario y Popular

MCNOC-Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

MCP- Movimiento Campesino Paraguayo

ONAC- Organización Nacional Campesina

ONG-Organismos no Gubernamentales

ROAM- Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay

SEAM- Secretaría del Ambiente

SENAVE- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

UGP- Unión de Gremios de la Producción

## INTRODUCCIÓN

El Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina (IDD) es el principal instrumento de trabajo conjunto de las ONG asociadas de la ALOP. Se trata de una investigación realizada colectivamente por las asociadas y que incluye una primera etapa de análisis a nivel nacional en cada país y luego, con base en estos insumos, una mirada regional y continental. Con este Informe, cada dos años ALOP produce nuevos conocimientos, análisis y evaluaciones sobre la realidad latinoamericana, sobre las movilizaciones en defensa y por la ampliación de la democracia, sobre las posibilidades y luchas por la conquista del desarrollo en nuestro continente.

El IDD 2012-2013 aborda la respuesta social a las consecuencias de la reprimarización de las economías de la región y las oposiciones o divergencias frente a proyectos de país que han dejado atrás la apuesta por la industrialización y se han instalado en programas basados en la extracción intensiva de recursos naturales y el consumismo típico de las sociedades industriales, con sus respectivos impactos en la naturaleza y la sociedad. En esta línea, el IDD 2012-2013 se centra en las demandas, acciones y propuestas de los movimientos y organizaciones sociales relativas a la orientación de la política económica en materia de recursos naturales, identificando sus estrategias y puntos de convergencia, así como conflictos existentes y mediaciones posibles en el marco de la democracia.

En este capítulo nacional, que corresponde a Paraguay, se entiende por extractivismo la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como material primas a los mercados globales. En su sentido estricto, el extractivismo es mucho más que la minería; la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura.<sup>1</sup> Raúl Zibechi, en su acertado artículo titulado “Golpismo y extractivismo” asegura que este último es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital, es parte de otras fuerzas menos visibles pero igual o más desestabilizadoras que las que conocemos de larga data: “en rigor forma parte del complejo especulativo financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente.”

Como dice Alicia Amarilla, dirigente de la CONAMURI, Paraguay representa un claro ejemplo para entender hasta dónde puede llegar el poder corporativo para conseguir sus intereses mercantilistas, para comprender hasta dónde es capaz de ceder la constitucionalidad política

---

1 Eduardo Gudynas (2010): “Agropecuaria y el nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur”, en Territorios, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala.

que se convierte a su vez en el poder económico corrupto y hasta dónde puede llegar el afán de enriquecerse menospreciando los derechos humanos esenciales.

### **Características centrales del agro-extractivismo:**

“Hay una remoción de enormes volúmenes de recursos, los que se exportan sin ser procesados o con un escaso procesamiento. Son prácticas de creciente mecanización y uso de agroquímicos, uso de transgénicos, manejo diversificado y tercerizado de la producción, ingreso de nuevas tecnologías de siembra directa y agricultura de precisión, proliferación de acuerdos económicos vinculados a la producción, etc. La generación de empleo es escasa, y en lugar de ser enclaves acotados como en la minería, se observan enclaves difusos. Estas exportaciones son muy importantes en varios países, destacándose que en Argentina, Paraguay y Uruguay, representan más de la mitad de las ventas externas, y en Brasil, más de un tercio. La tendencia es concebir a la agricultura no como una proveedora de alimentos sino como una proveedora de mercancías.”<sup>2</sup>

Paraguay es uno de los líderes mundiales del extractivismo agrícola. Es el cuarto productor mundial de soja, superando en la zafra 2012-2013 la cifra récord de 9,3 millones de toneladas, duplicando la cosecha del año anterior. Ese volumen, casi en su totalidad, fue exportado sin ningún tipo de procesamiento. Así como en el caso de Brasil y Argentina, este fenómeno va de la mano con un aumento del 6,5% del área de cultivo y un rendimiento promedio de 2.967 kilos por hectárea a nivel nacional según los datos oficiales de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

En su estudio, Gudynas menciona que la producción agrícola y pecuaria continúa expandiéndose en América del Sur con nuevas formas de producción que son cada vez más intensivas y con mayores impactos territoriales, lo que les vuelve más parecidos a otras formas de extractivismo. Lo que a muchos sorprende es que este proceso ocurre bajo gobiernos autodefinidos como progresistas o de izquierda que durante décadas denunciaron el extractivismo y las economías de enclave. En este nuevo extractivismo, la asistencia estatal y la lucha contra la pobreza son las banderas prioritarias.

En Paraguay, fueron las organizaciones sociales y campesinas las que llevaron a Lugo al poder, y esperaban que sus reclamos y deseos de reformas en temas como la producción agropecuaria, la tenencia de la tierra o el apoyo al campesinado lograsen avances sustantivos durante ese mandato. Esas críticas incluían la concentración de la producción agropecuaria, tanto en la propiedad de la tierra como en las cadenas de comercialización y producción, la orientación hacia la agroindustria exportadora, y la continua marginalización de los campesinos o familias de pequeños agricultores.

Difícilmente en un pequeño país como Paraguay pueda hablarse de una reprimarización de la economía; históricamente los sucesivos gobiernos no apostaron por la industrialización, como sí lo hicieron en otros países de la región. En el caso paraguayo, nuestra mediterránea economía siempre estuvo basada en la extracción de recursos naturales y la exportación de materias primas y energía. Ante este panorama, se centró el IDD 2011-2013 en las demandas, acciones y propuestas de los movimientos y organizaciones sociales relativas a la repentina aceleración e intensificación de la producción de granos para la exportación, con la soja como rubro estrella del sector agroexportador paraguayo.

Se considera a la producción y exportación de soja como una práctica extractivista, ya que se apropia de la riqueza del suelo dejando en el país solo los impactos negativos sobre el ambiente y la población. Ante la inexistencia de impuestos a la exportación, las externalidades de dicha práctica extractivista, entendidas como los costos socio ambientales no asumidos, ni siquiera pueden ser justificados como fuentes de recursos económicos para el desarrollo y los programas sociales. ¿Cómo se enfrentan los movimientos sociales ante el avance y fortalecimiento del sector agroexportador en general, y ante la reciente liberación irregular de transgénicos? ¿Que demandan? ¿Que proponen?

Se intentó responder estas preguntas a través de fuentes indirectas y directas, como las tres entrevistas realizadas a líderes referentes de organizaciones sociales campesinas: CONAMURI (Perla Álvarez y Cintia González), MCP (Pablo Ojeda), CNOCIP (Liberato Bracho, Manuel Medina y Nicolasa Trinidad). Se realizó también una entrevista a un académico estudioso de la materia del CDE (Quintín Riquelme) y, un grupo focal con referentes ambientalistas del Movimiento Los Verdes, del que también participaron Elías Díaz Peña y Oscar Rivas, ex Secretario del Ambiente durante el gobierno de Fernando Lugo.

Este informe abarca los años 2011 al 2013. Como el Golpe de Estado parlamentario ocurrió el 22 de junio del 2012, la primera mitad de este informe alude al Gobierno de Fernando Lugo y la segunda mitad al cuestionado Gobierno de Federico Franco.

## **1. CONTEXTO**

### **1.1. Contexto general**

En este informe se analiza la expansión descontrolada del extractivismo agroexportador paraguayo, con sus impactos y consecuencias directas que no son debidamente investigados ni inventariados. Se ilustra su vinculación con la destrucción del medio ambiente, los impactos en la salud y el desplazamiento forzado de la población rural, hechos que ponen al descubierto el fracaso inminente de las políticas que supuestamente buscan el desarrollo nacional a través de la explotación irracional y a gran escala de los recursos naturales.

Como todo país eminentemente agrario, Paraguay descansa sobre la agro exportación, y todos los actores políticos y sociales importantes se insertan de manera significativa en la estructura agraria. Parafraseando a Fogel<sup>3</sup> podemos describir al país en pocas líneas: la sociedad paraguaya es una de las más injustas del continente y la concentración de la tierra y del ingreso rural están en la base de los conflictos; el 2,5% de los propietarios detentan el 85% de las tierras; los sojeros, en su mayoría o casi, brasileños y “brasiguayos”, acaparan la mayor parte de los suelos cultivables. Este acaparamiento y extranjerización de la tierra no inquieta a los partidos tradicionales, los que desde sus posiciones conservadoras y ultraconservadoras se asocian a los inversores extranjeros. En relación a la extranjerización, Fogel sostiene que este modelo agroexportador responde a la lógica del enclave con consecuencias sociales y ambientales marcadamente negativas, favoreciendo a un número muy reducido de productores, en su mayoría brasileños de origen.

El rubro estrella del extractivismo paraguayo es la soja. El siguiente dato sintetiza en qué consiste “el mar de soja”: según cálculos de la ONG Alter Vida, más veinte millones de litros de agroquímicos se fumigan en Paraguay cada año, intoxicando a la gente, al agua, la tierra cultivada y toda la vida que encuentra en su camino.

Las compañías transnacionales de insumos agrícolas y exportadoras son las que dirigen la enorme agroindustria extractivista. Los impactos, a muy grandes rasgos, de este modelo productivo en Paraguay se reflejan en los siguientes números. Se estima que desde los ochentas, casi 100.000 pequeños agricultores han sido despojados de sus casas y campos, y un número desconocido de comunidades indígenas han desaparecido o han sido reubicadas para dar cabida a los campos de soja. En el mismo período, más de 2000 campesinos se han enfrentado a acusaciones vinculadas con su resistencia a la industria sojera, en una evidente estrategia de criminalización de la lucha campesina.<sup>4</sup>

Existe una migración forzada porque las tierras de las comunidades son codiciadas por sojeros, ganaderos y otros especuladores inmobiliarios: “La migración forzada del campo a la ciudad es permanente, crónica, es como una herida del país que sangra, y no se puede parar, no coagula, y así la sociedad y el país se desangran. Porque esta migración no es voluntaria, no vienen a trabajar en las ciudades, porque sencillamente en las ciudades no hay trabajo para ellos, ni siquiera para los que ya están en las zonas urbanas, que sobreviven entre la delincuencia, las changas, trabajos extremadamente precarizados e informales, como la venta ambulante, el reciclaje, etc.”<sup>5</sup>

---

3 Ramón Fogel (2012): “El movimiento de los carperos”, en Novapolis 5, Revista de Estudios Políticos Contemporáneos.

4 <http://www.vientofuerte.com/articulo.php?art=22240#.Ueruf41QE8s>

5 <http://www.vientofuerte.com/articulo.php?art=22240#.Ueruf41QE8s>

Como señala un informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas “la expansión del cultivo de la soja ha traído consigo el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos, provocando muerte y enfermedad en niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas, y daño a los recursos nutritivos tradicionales de las comunidades”.<sup>6</sup>

El extractivismo basado en la exportación de granos genera presiones sociales y ambientales muy fuertes, hace que la economía dependa casi exclusivamente de las exportaciones para crecer, y al mismo tiempo el país se vuelve más dependiente de las condiciones globales, como los precios internacionales de las materias primas o el aporte de inversores extranjeros.<sup>7</sup> En palabras de Milda Rivarola: “El modelo del agro-business, más la escasa presión tributaria, más la baja inversión social genera que la concentración crezca rápidamente y concentración es desigualdad. El problema del Paraguay no es la pobreza sino la desigualdad”.<sup>8</sup>

En su artículo titulado “Paraguay, democracia falsificada”, Frei Betto resume lo sucedido con el gobierno de Lugo, el gobierno de la alternancia. En el 2008, el pueblo paraguayo votó a Lugo, quien generó en la gente muchas expectativas de que la democracia reduciría la desigualdad social. En su opinión, el gobierno de Lugo se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y al distanciarse de los movimientos sociales. Falló también Lugo al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, lo que desarticuló los liderazgos del campesinado y criminalizó a los movimientos sociales.<sup>9</sup> Se ha mencionado también que aunque Lugo no cumplió muchas de sus promesas electorales al sector campesino, en realidad trabajó para bloquear muchas de las políticas de la derecha que habrían empeorado la crisis en el campo. Por ejemplo, Lugo y su gabinete se resistieron al uso de semillas transgénicas de algodón de Monsanto en Paraguay, una acción que probablemente contribuyó a su destitución.<sup>10</sup>

En junio del 2012, Paraguay vivió por un lado la masacre de Curuguaty y, por el otro, el Golpe de Estado parlamentario disfrazado de juicio político. A más de un año de lo sucedido, existen muchos indicios de que la masacre, que terminó con la vida de 17 personas, fue un montaje para justificar la destitución de Lugo. Una investigación realizada por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP) desacreditó casi todo lo expuesto por el fiscal encargado de esclarecer el caso. Hasta el presente, la justicia paraguaya no aclaró a quién

---

6 <http://rebellion.org/noticia.php?id=153274>

7 Eduardo Gudynas (2010): Ob. cit.

8 <http://www.vientofuerte.com/articulo.php?art=22240#.Ueruf41QE8s>

9 [http://www.decidamos.org.py/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=626:paraguay-democracia-falsificada](http://www.decidamos.org.py/index.php?option=com_k2&view=item&id=626:paraguay-democracia-falsificada)

10 <http://rebellion.org/noticia.php?id=153274>

pertenecen las tierras de Marina Cué, que fueron causa y escenario del enfrentamiento entre campesinos y policías; porque todo indica que son nomás del Estado.

La destitución de Lugo, una semana después de la masacre, se dio en un tiempo record y es bien descrita por Benjamín Dangl: El proceso comenzó el 21 de junio, y dentro de las 24 horas siguientes el Senado se reunió e inició oficialmente el juicio, dando a Lugo solo dos horas para su defensa. Al día siguiente, Lugo fue destituido en una votación de 39 contra 4. En el juicio somero, Lugo fue acusado de alentar ocupaciones de agricultores sin tierras, de mal manejo como Presidente y de no haber logrado la armonía social en el país. Lugo renunció y fue reemplazado por el vicepresidente y dirigente del Partido Liberal, Federico Franco. Se trató de un golpe parlamentario que fue condenado por antidemocrático e ilegal.

Como reacción al golpe, UNASUR y MERCOSUR suspendieron a Paraguay hasta las elecciones de abril del 2013. Como era de esperarse, la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió no suspender a Paraguay porque, según su secretario general, José Miguel Insulza, hacerlo crearía más problemas en el país y lo aislaría regionalmente.<sup>11</sup>

Una dirigente de la CONAMURI describe la situación luego del Golpe: “Comenzaron a cambiar radicalmente todas las cosas. Desde los funcionarios (despido masivo de funcionarios del gobierno) a la eliminación de los programas sociales, por eso la gente está descontenta... Se perdió lo que se había logrado con Lugo, apoyo a la tercera edad, programa para la pobreza extrema, una remuneración para las mujeres madres solteras. Por primera vez se logró que la salud sea gratuita pero ahora ves en los hospitales a la gente llorando...”<sup>12</sup>

En el marco del grupo focal sobre extractivismo en Paraguay con el Movimiento Los Verdes, realizado en junio 2013, se destacó que el territorio político paraguayo, y de otros países, fue cooptado hace mucho tiempo por las grandes corporaciones. La democracia participativa fue cooptada por esta acción corporativa que no tiene patria ni nación, basada simplemente en el lucro y el dinero. La agenda capitalista es hoy básicamente extractivista, desde el punto de vista de la relación con el medio natural, que son bienes patrimoniales de todo el planeta. Los Verdes-Paraguay consideran que el acceso a los bienes naturales es un derecho humano fundamental. Sin embargo, existen movimientos sociales nacionalistas que consideran que el reconocimiento de un derecho así implica una enajenación de su soberanía.

## **1.2 Cambios y hechos relevantes en el periodo 2011-2013**

Una investigación realizada por BASE-Investigaciones Sociales, antes del inicio del gobierno de Lugo, mencionaba que las organizaciones sociales entrevistadas en su gran mayoría habían

---

11 <http://rebellion.org/noticia.php?id=153274>

12 <http://alainet.org/active/61200&lang=es>

apostado durante la campaña electoral por la victoria de Lugo, “pero esta victoria no era un fin en sí mismo, sino un camino para la conquista de sus históricas reivindicaciones; por lo tanto sus expectativas eran altas, pero tenían también muchas preocupaciones y temores. Sabían que el escenario futuro dependía no solo de la voluntad política de Lugo, sino también de la propia fuerza de las organizaciones. Pronosticaron que el peor escenario posible era que el Parlamento bloquee las acciones del Poder Ejecutivo y que Lugo claudique ante las presiones de los sectores empresariales y latifundistas”.<sup>13</sup>

Para analistas como Dangl “Lugo no mostró una actitud positiva hacia el sector campesino que ayudó a llevarlo al poder. Su gobierno ejerció regularmente una severa represión y criminalización de los movimientos campesinos del país. Por lo tanto se vio aislado desde arriba en el ámbito político y abajo carecía de una fuerte base política debido a su posición hacia los movimientos sociales y el lento progreso de la reforma agraria. A pesar de todo, muchos sectores izquierdistas y campesinos consideraban a Lugo un aliado relativo y una fuente de esperanza frente a la alternativa derechista.”<sup>14</sup>

Según el ex Ministro del Ambiente, durante el último periodo del gobierno democrático de Lugo hubo un intento fuerte de convertir el proceso de extracción de los bienes naturales en un proceso controlado, dentro del marco legal vigente. El supuesto fuerte digamos era de que dicho marco legal, que se construyó durante la década del noventa, permitiría -si fuera aplicado correctamente- llevar este proceso a un estadio de gestión sustentable de los bienes naturales. El mencionado intento fuerte, sin embargo, no se dio por parte de todo el gobierno, ya que éste también estaba compuesto por sectores que pusieron trabas a este proceso de legalización y sustentabilidad del manejo de bienes naturales. En los primeros tiempos, en la Secretaría del Ambiente, aunque no allí exclusivamente, surgieron grandes trabas ligadas a la corrupción de funcionarios públicos, a quienes solo importaba las ganancias extra salariales que podrían obtener coimeando a un empresariado, que a su vez recurría a esta práctica para obtener fácilmente permisos de la institución.

Quintín Riquelme, sociólogo, destaca la ausencia de cambios a favor de los campesinos durante el Gobierno de Lugo, lo que no permite hablar de cambios importantes en la política agraria, pero sí de intentos, sobre todo a partir del 2011. En relación al SENAVE y la SEAM encuentra que su presencia fue casi nula, así como casi todas las instituciones responsables del manejo territorial del país, cuidado ambiental, etc. Por lo tanto, según él, a pesar de los esfuerzos de Miguel Lovera en el SENAVE, el trabajo no tuvo mucho impacto. Como dichas instituciones no tienen mucha presencia en el territorio, la gente prácticamente no ve al Estado, y eso genera

---

13 Marielle Palau y Guillermo Ortega (2009): “Movimientos sociales ante el nuevo gobierno: apostando al cambio sin bajar las banderas”, PDF.

14 Benjamin Dangl (2012:): “La guerra por los recursos naturales tras la crisis de Paraguay”, en Revista Rebelión.

muchas cosas, como la contaminación del agua y la deforestación. A su vez, la gente que defiende su hábitat, su territorio y que defiende su comunidad es imputada y arrestada por ese mismo Estado, que paralelamente moviliza centenas de policías para permitir que algunas empresas fumiguen sus sojales en zonas de conflicto con campesinos e indígenas.

En cuanto a la política agraria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) siguió con su vieja política, con varios programas descoordinados entre sí. En general, había descoordinación en el propio entorno de Lugo, lo que generaba indefiniciones y superposición de programas y de políticas públicas (MAG/INDERT/SEAM/HACIENDA/etc.).

Para asegurar la continuidad de los programas, se siguió con la estrategia de trabajar con comités de productores de organizaciones, por lo que en algunos lugares hubo superposición de esfuerzos mientras que a otros lugares no se llegó. Como producto del pacto con los liberales, al frente del MAG sólo estuvieron liberales, lo que para algunos fue un grave error, ya que eso implicó mantener el status quo o sea, no hubo cambios.

A mediados del periodo de Lugo, en febrero del 2011, se hace público un manifiesto de movimientos sociales<sup>15</sup> sobre la Reforma Agraria Integral y las Tareas del Movimiento Popular. A grandes rasgos, se afirmaba que los medios de comunicación hacen que ideas que descalifican la producción y las luchas campesinas e indígenas ganen fuerza en la opinión pública. Así pues, los campesinos e indígenas son “haraganes, ignorantes, la agricultura campesina es la causa de la pobreza, las organizaciones campesinas e indígenas son sinónimo de delincuencia, la reforma agraria no solucionará el problema rural, etc.”. En dicha ocasión, además de intensificar la lucha por la recuperación de las tierras mal habidas, se proponía: “Desarrollar un gran debate nacional sobre el modelo productivo a priorizar como país.”<sup>16</sup>

Para la CONAMURI: “Durante la última fase del gobierno Lugo no se percibe ninguna acción trascendente en relación al tema de los recursos, del medio ambiente incluso. Entre el 2009 y el 2010 se dan algunas iniciativas pero después ya prácticamente nada. Sin embargo, en el 2012 cuando se da el golpe de Estado parlamentario es cuando notamos, pero casi inmediatamente, un proceso acelerado de políticas que favorecen la extracción de bienes naturales”. En primer lugar, se produce la liberación del maíz transgénico, cultivo utilizado por la agroindustria en

---

15 Partido Comunista Paraguayo; Partido Convergencia Popular Socialista; Partido Popular Tekojoja; Organización de Lucha por la Tierra (OLT); Coordinadora de Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN); Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); Organización Sebastián Larrosa; Movimiento Agrario y Popular (MAP), Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI); Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos (MTR); Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIPI); Alianza Campesina (AC); Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA).

16 <http://www.komiteinternacionalistak.org/index.php/es/noticias/latinoamerica/otras-noticias-de-latinoamerica/1073-pronunciamiento-de-movimientos-sociales-de-paraguay>

rotación con la soja; en segundo lugar, se deroga la Ley de Aviso Previo a las Comunidades para hacer fumigaciones.

El 5 de junio, antes del golpe, POJOAJU, la Asociación de ONG del Paraguay, el Movimiento Agrario Popular (MAP), Sobrevivencia-Amigos de la Tierra Paraguay, Base-Investigaciones Sociales, CONAMURI y otros miembros de la Red de Organizaciones Ambientistas del Paraguay (ROAM), anunciaron mediante un comunicado su retiro de las discusiones en torno al Proyecto de Ley de Bioseguridad en la Cámara de Diputados. En la ocasión, se alegó que “la actitud de los diputados demuestra que nuevamente no responden a los intereses del pueblo paraguayo. Condenamos esta actitud pues de ser aprobada esta propuesta, daría vía libre a la entrada rápida y fácil de transgénicos, lo que implicaría graves intoxicaciones y daños a la salud de poblaciones enteras que viven en el campo.”<sup>17</sup>

Inmediatamente después del Golpe de junio del 2012 se dieron reacciones casi instantáneas en sentido contrario, buscando dismantelar el proceso anterior. La liberación irregular de los transgénicos fue lo más cuestionado: “lo del maíz transgénico pero también lo del algodón transgénico es particularmente sensible, porque ambos son cultivos nativos, de aquí, de esta zona del planeta. El maíz además es alimento del cual depende básicamente toda la población del Paraguay, o sea que, tenemos pérdida de soberanía y deterioro de la salud en perspectiva”.

También se destaca la ausencia de una ley de “deforestación cero” en la Región Occidental, y los proyectos de infraestructura que facilitan la extracción y circulación de mercancías, como las rutas o vías bioceánicas y la hidrovía en el río Paraguay. Sobre los impactos e indemnizaciones de estas mega obras se dice que: “no hacen ningún tipo de resarcimiento digamos por los efectos en la naturaleza, o también en las comunidades; hablando así, en términos economicistas, es el efecto sobre el medio ambiente; pero para las que también somos organizaciones afectadas, puesto que es nuestro hábitat, nuestro territorio el que se está destruyendo y, por lo tanto, nos están expulsando, pues en nuestro caso, eso no tiene ningún tipo de medida compensatoria... Pero ni aun así nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, como CONAMURI nosotras incluso dudamos mucho.”

A su vez, la CNOCIP menciona los desafíos impuestos por la fuerte expansión de la producción ganadera, a raíz de la expansión del mercado internacional de la carne paraguaya, lo que también genera presiones sobre la tierra y además tiende a encarecer la carne, mientras que los buenos cortes van a la exportación...”. Así también, esta coordinadora resaltó que “después de la caída de Lugo se liberó todo lo referente a protección en relación a agroquímicos, la barrera verde de protección, eso se liberó; prácticamente se retrocedió de vuelta y de nuevo

se rocía a las comunidades campesinas. De ahí que se haga trabajo de base, que es muy importante ¿Por qué? Porque se defiende a las comunidades campesinas, ésta es la última alternativa, tenemos que ser realistas también...”

La CONAMURI menciona las concesiones de exploración y explotación mineras y petroleras otorgadas últimamente por el gobierno de Franco. Sobre el punto, comentan: “la minería, que en nuestro país siempre fue muy invisibilizada a nivel de la economía, pasó a tener en esta última fase de nuestra historia, digamos con este gobierno del Golpe, una notoriedad importante, como ser el tema del oro en toda la zona del Guaira, lo que genera conflictos entre comunidades afectadas. También en el Alto Paraná, por primera vez se están concediendo licencias para extracción de hidrocarburos y otros minerales como el titanio, el uranio, el litio y otros que yo ahora no recuerdo”. Se informa de que “en este periodo de un año, son más o menos 20 licencias las otorgadas a empresas mineras, no solo en la Región Oriental sino también en el Chaco. Uno o dos meses después del golpe, a raíz de la visita que hace Franco a Estados Unidos se firma un acuerdo, que implica una licencia de concesión de permiso para explotación de petróleo en el Chaco, sin haber hecho ningún tipo de consulta allí, con las comunidades indígenas se entiende.”

En general, la percepción de los entrevistados es similar. Algunos resaltaron la necesidad de evaluar la experiencia del gobierno de Lugo en un proceso y contexto más amplio. Paraguay vive un modelo económico manejado por las grandes corporaciones y sus intereses, vinculados a su vez a los países hegemónicos del norte del planeta. Hay relaciones que se desarrollan desde tiempos de la colonia, en cuanto a la exploración y explotación de los bienes y las riquezas naturales del continente, sistema que fue perfeccionándose con la cooptación de gobiernos.

El gobierno democrático de Lugo, fruto de una movilización popular y de una Alianza para el Cambio (APC) que no se concretó, se encontró con un Estado que tenía una agenda que cumplir a rajatabla y un marco legal que actuó como un corsé para el nuevo gobierno, más aun si se considera que lo único que se había “conquistado” era el Poder Ejecutivo, y eso con una alianza integrada por partidos y movimientos con grandes contradicciones. Sin embargo, se suponía que Lugo, como cabeza del Ejecutivo, podía tomar importantes decisiones. Al respecto, Oscar Rivas recuerda que: “para tomar esas decisiones, nos encontramos en un Estado diseñado a imagen y semejanza de lo que el Norte quisiera y lo que el Norte quisiera es lo que las corporaciones transnacionales quisieran. Ante cualquier modificación posible nos encontrábamos frente a ese muro gigantesco, hipersólido y hemos sido muy cuestionados; casi inmediatamente se intentó rajarnos a quienes hemos intentado subvertir ese orden preestablecido por muchos años. Creo inclusive que en toda esa transición política, desde Rodríguez en adelante, ante cualquier cambio que hubieran querido introducir los otros se encontraron con lo mismo; esta no es una cuestión de colorados versus liberales versus izquierdistas exclusivamente; este es un país sometido a intereses extra países. Y este es el

continente embarcado en una aventura política en la que están Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, incluso Uruguay, y se enfrentan /encuentran con el mismísimo dilema, sólo que con una perspectiva política más definida y fuerzas políticas internas, endógenas, que juegan de manera diferente.”

### **1.3 Organizaciones y Movimientos que se destacan.**

En base a la cronología de movilizaciones realizada por el CDE, se puede notar cómo las grandes movilizaciones se acaban en el 2008, o disminuyen a su mínima expresión... Se menciona que antes, la gente se movilizaba por la tierra, en ocupaciones, sólo después del 2004 hay más movilizaciones contra la siembra de soja. Para Quintín Riquelme, puede compararse lo que ocurrió con el cambio de gobierno de Lugo y la caída de Stroessner: “la gente se movilizó mucho al principio creyendo que llegaba la democracia y que con la misma se iban a resolver todos los problemas sociales y no fue así... Con Lugo ocurrió algo parecido, se movilaron al inicio, creyendo también que llegaba la solución, sólo que con Lugo la gente se sintió mucho mas identificada porque era nuestro gobierno, nosotros participamos en la toma del gobierno, ¿verdad?; y no vamos a hablar de poder, porque no teníamos poder...”. Las grandes movilizaciones empezaron a diluirse en el 2008, 2009 y la lucha campesina se localizó más territorialmente, en algunos asentamientos.

El siguiente testimonio intenta sintetizar lo que ocurrió: “En años recientes, las organizaciones han perdido mucha fuerza, eso es de público conocimiento. En tiempos de Nicanor (Duarte Frutos), se hizo muy fuerte la lucha y quedamos muy golpeados; existía mucha persecución de parte del mismo gobierno y de parte de los matones de los empresarios. Entonces, después de eso se debilito la organización, y como CNOCIP comenzamos a fortalecer las bases, comenzando desde la defensa de la tierra; pero los grandes empresarios, los grandes sojeros son muy fuertes y golpearon a la gente.”

La excepción a la desmovilización se da con la formación de la Liga Nacional de Carperos (LNC), lo que coincide con el debilitamiento de las organizaciones tradicionales, algo que fue reconocido por las organizaciones entrevistadas. Este debilitamiento se debió tanto a la cooptación de dirigentes que pasaron a ocupar cargos públicos como al temor de presionar demasiado a Lugo. Según comenta Quintín Riquelme, “las organizaciones tenían cierta reserva para presionar mucho, porque ya la derecha presionaba bastante y esa misma dejadez digamos, el no haber presionado lo suficiente, hizo que empiece a crecer y crecer la derecha, que supo aprovechar muy bien esa falta de movilización social para presionar mucho más. Entonces llegó un momento en el que el gobierno se veía como ante una disyuntiva y terminó favoreciendo más al que tiene poder.”

El Observatorio de Derechos Humanos de BASE-Investigaciones Sociales lleva un pormenorizado recuento de las movilizaciones y acciones directas registradas en los principales

medios de prensa escrita del país. El periodo de análisis, desde octubre 2011 hasta inicios de junio 2013, comprende los últimos 9 meses de gobierno de Fernando Lugo y los 12 meses de gobierno del liberal Federico Franco. En estos 21 meses se registran 80 movilizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales. Se incluyeron aquí las ocupaciones de tierra y las manifestaciones/cierres de ruta realizadas con el fin de presionar a las autoridades la compra o recuperación de tierras para comunidades campesinas o indígenas. Así también, se incluyeron las ocupaciones y manifestaciones realizadas con el fin de oponerse a la deforestación y al uso irracional de agroquímicos. Se consideró también otros tipos de acciones directas más violentas, generalmente desarrollada por desconocidos, pero que fueron atribuidos a organizaciones sociales por los medios de prensa.

En los últimos 9 meses del Gobierno de Lugo, se dieron 16 ocupaciones, 13 manifestaciones/cierres de ruta y 7 acciones directas, los que totalizan 36. En el periodo del gobierno liberal de Federico Franco, se registraron 14 ocupaciones, 19 manifestaciones/cierres de ruta y 1 acción directa, los que totalizan 44. En el periodo de referencia se registraron en total 30 ocupaciones, pero la prensa no aclara en la mayoría de los casos (14) a qué organización pertenecen los ocupantes. De los 16 casos en los que se identifica a los actores, 6 corresponden a la Liga Nacional de Carperos (LNC), 5 a Comisiones locales, 2 a Comunidades Indígenas, 2 al Movimiento Agrario y Popular (MAP) y 1 al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP).

Las ocupaciones indígenas se refieren a una ocupación por parte de indígenas Ava Guaraní de la plaza Uruguaya, en el centro de Asunción, como medida de presión para lograr la intervención del Estado ante el despojo de sus tierras en Itakyry, Alto Paraná. La otra ocupación indígena corresponde a la re-ocupación realizada por la comunidad de Sawhoxamaya de Presidente Hayes.

Entre las ocupaciones mencionadas, algunas acapararon la atención de la opinión pública y de la prensa, como la ocupación de las tierras de Favero en Ñacunday por parte de la Liga Nacional de Carperos. También se destaca la reocupación de tierras en Marina Cué, Curuguaty, ocurrida el 19 de enero del 2012 (seis meses antes de la masacre), por parte de un grupo campesino de la Liga Nacional de Carperos, que sería más adelante víctima de la masacre perpetrada en el marco de un supuesto operativo de desalojo. Por otro lado, el 4 de febrero del 2013 se da la ocupación en las tierras de Barbero-cué, donde alrededor de 1.500 campesinos ocuparon cuatro establecimientos ganaderos en el distrito de San Pedro del Ycuamandyyú.

En relación a las 32 manifestaciones y cierres de ruta, en su mayoría fueron convocados y llevados a cabo por comisiones locales (9); estas comisiones generalmente están vinculadas a otras organizaciones de escala nacional, pero dicha información no fue registrada por los medios. Entre sus reivindicaciones está la compra de tierras para ampliación de sus colonias, la mensura judicial de grandes propiedades para identificar excedentes, la denuncia de

deforestación de los bosques nativos cercanos a comunidades y las manifestaciones ante las fumigaciones y la expansión de la soja transgénica en general. En base a estos registros, la Federación Nacional Campesina estuvo involucrada en por los menos 6 casos, la Liga Nacional de Carperos en 4. Las demás organizaciones, entre las que se mencionan específicamente al MCP, la ONAC, la MCNOC, la COCIP, la OLT y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas José Gaspar Rodríguez de Francia, tuvieron una participación menor (en términos de número) en comparación con las primeras. Recordemos que estos números reflejan solo lo registrado por la prensa.

De las manifestaciones mencionadas, podemos destacar por su convocatoria o relevancia, en orden cronológico: la marcha por la mensura de las tierras de Ñacunday y por la recuperación de tierras mal habidas (25/10/2011) realizada con el apoyo de la LNC, la MCNOC, la ONAC y el MCP, entre otras. Las marchas anuales de la FNC, en marzo de cada año. Los cierres de rutas en 14 departamentos del país, para exigir el cumplimiento y la prórroga del Decreto presidencial No. 8282/12 –que declaraba emergencia alimentaria a causa de la sequía-, y la aprobación del proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena (09/05/12).

La serie de marchas en oposición a la liberación ilegal de variedades de algodón y maíz transgénicos, entre agosto y octubre del 2012, entre las que destaca una movilización unitaria convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP), donde participaron más de 5.000 personas. El campamento y huelga de hambre de la comisión Santa Lucía, de Ñacunday, por meses, frente al Congreso Nacional, y la masiva marcha por los Derechos Humanos convocada por la Mesa de Unidad de Organizaciones Sociales y Políticas (10/12/2012).

Los cierres de rutas donde los indígenas fueron los protagonistas son 3: un cierre de ruta por parte de comunidades Avá Guaraní de Capi'ibary, otro de comunidades Avá Guaraní de Itakyry para evitar un desalojo de sus tierras ancestrales, y un cierre de dos rutas en el Chaco por parte un gran contingente de indígenas Enxet (12/10/2012). Aparecen también otros actores menos conocidos, como las organizaciones de familias criollas en conflicto con nuevos acaparadores de tierra en la región del Pilcomayo, las organizaciones de pequeños mineros de Paso Yobai, las manifestaciones en contra de las negociaciones para la instalación de la Minera Canadiense Rio Tinto Alcan, el Juicio Ético al Parlamento así como la serie de manifestaciones realizadas en solidaridad con las víctimas y los campesinos imputados por la masacre de Marina Cué. El MCP destacó su apoyo a lo que consideran lo más importante desde la caída de Lugo, el caso de Curuguay, a través de una movilización permanente de baja envergadura.

Por último, entre las acciones directas, algunas de éstas anónimas, podemos mencionar: las movilizaciones de indígenas Aché para defender sus tierras de la invasión por parte de campesinos de la LNC (10/12/2011); la quema de un puente por campesinos de una comisión local que cuestionaba los títulos de una propiedad de un extranjero en Capi'ibary; la quema de

un tractor en Tacuatí; la quema de otro puente ante la extranjerización, en Raúl A. Oviedo; la intervención y el impedimento de fumigaciones en Ñacunday; la quema de un sojal después de un desalojo en Hernandarias; y la toma de rehenes policías que quemaron ranchos, por parte de indígenas Avá Guaraní de la comunidad Ka'aguy Roky, en Itakyry, quienes se oponían a ser desalojados.

Durante el periodo previo a las Elecciones Generales de abril 2013, las organizaciones populares de Paraguay se enfrentaban a un escenario político complejo originado no solo por la caída del presidente Lugo o Gobierno de la APC en junio del 2012, sino por las propias dinámicas que se generaron con la llegada del Luguismo al poder. Una de las pocas instancias que logro sobrevivir en esos meses, como instancia nacional, es la Articulación Curuguay, en torno a la cual se han articulado organizaciones de la Vía Campesina, la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia CDIA, la Pastoral Social Nacional, y partidos políticos de izquierda, anarcos e independientes.<sup>18</sup>

En el marco del grupo focal con Los Verdes, al consultar sobre los actores resaltantes se destacaron los siguientes: el sector pesquero, las ONG, los pueblos indígenas, los movimientos de mujeres, las organizaciones campesinas y los grupos urbanos. Sintetizando, estos fueron los mencionados. Los pescadores fueron identificados como el socio más calificado para una agenda de la sustentabilidad, porque es el sector que depende más directamente del agua, el elemento más sensible a los procesos de contaminación por los paquetes tecnológicos que los agro negocios nos ofrecen. Las ONG, que surgen en tiempo dictatoriales en sustitución o ausencia de políticas públicas bien administradas, desarrollan luego toda una fundamentación para justificar la reivindicación de derechos de los movimientos. En un tercer momento, ya sea en gobiernos poco democráticos o progresistas, desarrollan herramientas de contraloría, al tiempo que se organizan y capacitan como ciudadanía. En años recientes, el sector de las ONG se ha debilitado y es blanco de la crítica de grupos hegemónicos y conservadores, temerosos al parecer de que los conocimientos generados puedan permear a sectores más resistentes.

El sector indígena, puede ser considerado el más radical y auténtico en sus planteamientos, y es otro sector bombardeado por aquellos que tratan de incorporarlo a un proceso de aculturación, a la racionalidad neoliberal. Hay un sector hegemónico, representado por políticos, patrones, y sojeros, que se dirige y copta a sus dirigentes con beneficios individuales para él y su familia.

---

18 <http://desinformemonos.org/2013/02/los-movimientos-sociales-en-paraguay-despues-del-golpe-de-estado/>

Al campesinado se lo identificó como un sector importante, el más reivindicativo, el que tuvo en ciertos momentos más claridad y del cual el movimiento ecologista aprendió mucho. Sin embargo, se considera que en la actualidad siguen muy divididos y con posturas hasta contradictorias. No es un sector homogéneo, sino un mosaico heterogéneo de posturas, incluso en relación al uso de transgénicos. Se recordó además que sólo el 15% del campesinado paraguayo está organizado, el resto responde todavía a los partidos tradicionales, por lo tanto al clientelismo y prebendarismo. El movimiento urbano, invisibilizado, joven y genuino, no tiene líderes identificables y ha demostrado que responde a convocatorias diversas. Por último, el movimiento de mujeres, como Kuña Pyrenda, que en las últimas elecciones tenía una plataforma muy coherente, muy atractiva, pero sin embargo no logró demostrar su poder en las urnas, no logró convencer.

## **2. CASO: REACCIONES Y PROPUESTAS ANTE LA LIBERACIÓN OLEGAL DE VARIEDADES TRANSGÉNICAS DESPUÉS DEL GOLPE Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA FRONTERA SOJERA.**

La liberación acelerada e irregular de una serie de eventos transgénicos pocos meses después del Golpe de Estado parlamentario de junio del 2012 significa una intensificación de la economía agroexportadora. La frontera sojera que avanza sobre el territorio campesino e indígena se fortalece así en detrimento de otros sectores y otras visiones alternativas. Al analizar las reacciones de los movimientos sociales implicados, se busca identificar las estrategias y puntos de convergencia de los mismos. Se busca identificar la agenda principal-común y las estrategias o mediaciones en el marco de la defensa de los derechos humanos. Se pone énfasis en los movimientos de carácter democrático, incluyente y sustentable. Se entrevistó a los dirigentes de organizaciones campesinas que manifestaron de diferentes formas su rechazo a dicha liberación. Se analiza también, en el marco de dicho estudio de caso, el rol de las instituciones públicas involucradas en la liberación, el papel de los medios de comunicación, las ONG y el sector empresarial.

Esta “legalización ilegal” de transgénicos forma parte del debilitamiento de las políticas sociales, el cierre de algunos programas específicos claves en la materia, y el fortalecimiento de la criminalización de la pobreza. Milena Pereira analiza en el Informe 2012 de la CODEHUPY los avances y retrocesos en el marco de la soberanía alimentaria, considerado requisito para la seguridad alimentaria y para el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada. Menciona que hasta junio del 2012 era posible registrar ciertas iniciativas gubernamentales que ponían algún límite al avasallamiento de las bases del sistema alimentario tradicional, así como a la creciente destrucción de las condiciones de producción de alimentos diversificados por parte de la agricultura campesina e indígena. Luego del Golpe, es éste uno de los campos donde se observan las señales más alarmantes de retroceso. El gobierno de Franco, inició un proceso

de “depuración” arbitraria en entes estratégicos competentes, con miras a borrar la perspectiva de derechos en las políticas públicas.<sup>19</sup>

En agosto del 2012, dos meses después del golpe, el titular de facto del Poder Ejecutivo, a pedido del MAG, dictó el decreto N° 9503, por el cual se autoriza al SENAVE que, en forma excepcional, viabilice la introducción de las semillas de algodón conteniendo los eventos MON 531 (BT), MON 1445 (RR) y MON 1445 (RR) para la campaña algodonera 2012-2013. Estos eventos transgénicos son protegidos contra insectos lepidópteros y tolerantes al glifosato. El nuevo presidente del SENAVE, organismo estatal que controla la calidad de las semillas, también resultó ser accionista de Pacific Agrosiences, una empresa dedicada a la venta de agroquímicos, y fue el que habilitó –incumpliendo el debido proceso definido por los convenios internacionales, de los que Paraguay es parte– una variedad de algodón transgénico de la multinacional Monsanto que la administración anterior había rechazado.

Para Alter Vida, el Decreto N° 9503/12 viola normas jurídicas de mayor jerarquía según el orden jurídico positivo establecido por el artículo 137 de la Constitución Nacional, desconociendo disposiciones expresas del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por ley de la República N° 2.309/03, instrumento jurídico internacional (que) tiene carácter vinculante para nuestro país, en cuanto al tratamiento y uso seguro de los productos de la biotecnología moderna.<sup>20</sup> Esto fue considerado también una grave violación al derecho a la salud<sup>21</sup>, ya que durante el gobierno de Lugo el SENAVE no aprobó la inscripción del uso comercial en el país del algodón transgénico porque no tenía los dictámenes positivos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ni de la Secretaría del Ambiente.<sup>22</sup>

Como se menciona en el Informe de la CODEHUPY, poco tiempo después el SENAVE aprobó también con gran velocidad cuatro variedades de maíz transgénico –dos de la empresa multinacional Monsanto, una de la empresa multinacional Syngenta y otra de la empresa multinacional Dow AgroSciences–, subordinando el interés nacional a la voluntad de transnacionales. A esto se suma la derogación de la Resolución N° 1.160/11, “Por la cual se reglamentan aspectos vinculados con la aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola”, que apuntaba a generar protecciones mínimas para la población rural ante las fumigaciones con agro tóxicos. Se promovió con ello una desregulación de las fumigaciones. O sea que, hoy ya no se requiere dar aviso previo a las comunidades aledañas que serán afectadas por fumigaciones.

---

19 Codehupy (2012): Yvypóra Derécho Paraguáipe –Derechos Humanos en Paraguay 2012. Asunción.

20 Ibid.

21 En especial el artículo 7 - Del derecho a un ambiente saludable y el artículo 8 - De la protección ambiental de la Constitución Nacional.

22 Codehupy (2012): Ob. cit.

Se evita así la aplicación de reglas fitosanitarias en el uso desmedido de agro tóxicos, mientras se pone en riesgo la salud y la vida de las familias pobladoras de las zonas afectadas.<sup>23</sup>

Los impactos que este manejo irresponsable de la autoridad genera son incalculables. Especialistas hicieron hincapié en la gravedad de los efectos de la legalización del maíz transgénico en el país, ya que el maíz forma parte de la alimentación cotidiana de la población paraguaya, más aún de las comunidades campesinas e indígenas. Además, diversos estudios internacionales han mostrado una alta relación entre el consumo de maíz transgénico y la aparición de tumores u otras anomalías en ratas de laboratorio. Así mismo, otro problema específico del maíz es la contaminación genética por polinización; debido a este riesgo de contaminación genética están en peligro más de 10 variedades nativas de maíz en Paraguay, considerada una de las regiones de origen del maíz.<sup>24</sup> Otros expertos sostienen que las variedades de maíces transgénicos que producen sus propios insecticidas (variedades Bt) eliminan indiscriminadamente tanto los insectos perjudiciales para el cultivo como los benéficos para la manutención de la vida; contaminan la miel con su polen tóxico, exacerbando la incidencia de casos de alergia en humanos, y representan un peligro para el ambiente. Se indicó también que la introducción de maíz transgénico generaría beneficios económicos solo a las grandes empresas. Por lo tanto los transgénicos no reducirán el hambre, sin embargo, dejarán mayor desigualdad en la distribución de los alimentos y seguirán expulsando campesinos y campesinas del campo hacia las ciudades, donde no existen proyectos que los ayuden a vivir con dignidad.<sup>25</sup>

La liberación de eventos transgénicos resistentes al glifosato implica también una intensificación del uso de este herbicida, con todos los impactos negativos conocidos. Implica también, más discriminación hacia las mujeres indígenas quienes: “son discriminadas por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujeres, configurando de esta manera una triple discriminación. Se hace evidente que la situación de las mujeres es de desventaja con respecto a la de los hombres, y se reproducen condiciones de discriminación que suelen afectar de manera especial a las mujeres. En la Región Oriental, ante el acoso de los agro- negocios a las poblaciones indígenas, la situación de riesgo generada por los cultivos transgénicos, y la progresiva destrucción de modos y medios de vida, fueron las mujeres quienes sufrieron mayormente en este contexto.”<sup>26</sup> Además, como destaca Oscar Rivas, más allá de que se haya aprobado eventos transgénicos para uso comercial, se liberó de presión la introducción ilegal de otras semillas transgénicas en el Paraguay, de otras especies de árboles, de hortalizas de granos, etc.

---

23                    Idem.  
24                    Idem.  
25                    Idem.  
26                    Idem.

## 2.1. ¿Quiénes son los actores involucrados?

En el caso de análisis, los actores principales son estatales: MAG, SENAVE, SEAM, MSPyBS, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo.

Las empresas privadas nacionales y las corporaciones internacionales dedicadas a la provisión de insumos y de la exportación de granos son el poder detrás del poder, entre ellas destacan: Monsanto, Cargill, Bunge, Pioneer, Syngenta, Archer Daniels Midland (ADM), Dreyfus, Dupont y Dow AgroSciences.

Los gremios privados como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial del Paraguay (UIP), la Asociación de Productores de Soja (APS) y la CAPECO son los actores encargados de hacer lobby a nivel nacional para defender los intereses de una élite terrateniente.

Los medios de comunicación juegan un papel central en la instalación de una ideología que estigmatiza al campesinado y limpia la imagen del sector “sojero”.

Las organizaciones sociales, principalmente representadas por las organizaciones campesinas y algunas ONG son otro actor central, ya que son las directamente afectadas por estas políticas, e, históricamente han demostrado tener cierta capacidad de reacción ante amenazas como éstas. Se destacaron por reaccionar ante la “liberación ilegal” de eventos transgénicos, a través de manifestaciones y de comunicados, organizaciones como la CONAMURI, la CNOCIP y la FNC entre otras. Sin embargo, las reacciones y acciones no tuvieron la dimensión que un retroceso y arremetida como esta ameritaba. Para comprender las razones de esta baja capacidad de reacción se debe tener en cuenta el contexto post golpe en que esto ocurrió, y el estado de shock en el que la ciudadanía se encontraba.

La Red Rural, integrante de Pojoaju, se pronunció denunciando la ilegalidad del proceso referido. La ONG Altervida solicitó, a través de un comunicado, que se hagan públicos los dictámenes de la Comisión de Bioseguridad, específicamente los de inocuidad alimentaria y la licencia ambiental que deben ser otorgados por el MSPyBS y la SEAM respectivamente. Denunció que el algodón transgénico, liberado por decreto, no cuenta con licencia ambiental, siendo la misma requerida para la etapa comercial, como lo establece la Resolución N° 376 que aprueba el flujograma o etapas que deberán seguirán las solicitudes de ensayos regulados de organismos genéticamente modificados (OGM). Todos estos son requisitos técnicos y jurídicos para que el MAG autorice la liberación comercial del algodón transgénico y su posterior trámite

para su registro comercial, como lo establece la Ley Nº 385/94 De Semillas y Protección de Cultivares.<sup>27</sup>

Como se menciona en el informe de CODEHUPY, el 18 de agosto del 2012 las principales federaciones y coordinadoras del movimiento campesino e indígena del país así como organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientalistas, hicieron público un comunicado en el que manifestaban su preocupación por las decisiones del gobierno de facto de Federico Franco, entre las que se incluía la posible liberación comercial de cuatro especies de maíz transgénico. Las organizaciones sociales reclamaban al MSPyBS y a la SEAM que exijan a las empresas Monsanto, Syngenta y Dow Agrosiences la presentación pública de los estudios completos y contundentes que prueben la inocuidad alimentaria y el no impacto perjudicial al medioambiente de los cultivos de maíz transgénico que pretendían introducir en Paraguay. Advertían además que numerosos estudios científicos de todo el mundo comprueban los efectos negativos del maíz transgénico en la salud humana, las consecuencias nocivas sobre el equilibrio ambiental y la contaminación genética de las especies de maíz locales. Finalmente, exigían hacer estudios serios y de mayor rigor para evaluar la liberación de dichos eventos transgénicos.<sup>28</sup>

Dos días después de la liberación del algodón transgénico, la Federación Nacional Campesina (FNC) comunicó su repudio y rechazo y, posteriormente, realizó una campaña y una marcha en Asunción en la que participaron más de 200 personas. Denunciaron ante los medios que dicha liberación implicaba más pérdida de soberanía y el despojo de un rubro importante para el pequeño y mediano productor. Manifestaron que los productores algodonereros agremiados a la FNC invirtieron mucho trabajo para producir la semilla nacional IAN 425 y se verían muy afectados. Al poco tiempo, el 11 de octubre se anunciaba la firma de un convenio entre la FNC, el MAG y el SENAVE para asegurar la reproducción de las semillas IAN 425. La firma de este convenio fue muy cuestionada por las demás organizaciones campesinas tradicionales.

La CNOCIP rechazó inmediatamente mediante un comunicado la firma de un convenio entre la FNC y el MAG. Realizó un trabajo de concienciación, informando a la gente qué es lo que se estaba haciendo ante la liberación. Su postura fue clara, no estaban de acuerdo con el convenio firmado por la FNC y tampoco en plantar algodón ni otra semilla transgénica. En sus palabras: “la única organización que tomó cartas en el asunto fue la CNOCIP; tuvimos nuestro posicionamiento fuerte, inclusive argumentando los motivos, puesto que se veía que era una trampa y que se estaba utilizando a esos pobres compañeros, no sabemos si inconsciente o conscientemente. Pero si bien respetamos a una organización de mucha trayectoria como lo es la Federación, consideramos que esta vez fracasó.” Declaraciones como éstas revelan un desacuerdo sustancial con las posturas y decisiones de la FNC.

---

27 Idem.

28 Idem.

Ante la liberación de transgénicos, la estrategia de la CONAMURI consistió en denunciar e informar lo que estaba sucediendo a los compañeros de su organización y a otras organizaciones “para que no caigan en la trampa de cultivar transgénicos”, además de llamar la atención sobre “la falta de dictamen por parte del MSPyBS y la SEAM”. Recabaron información de los lugares donde se estaban cultivando esas variedades y de las empresas que estaban promoviendo en las comunidades. Así también, la CONAMURI hizo una denuncia internacional buscando con ello atraer las miradas sobre lo que ocurría en Paraguay y llamar la atención de los organismos internacionales. En tal sentido, llevó el caso ante la CIDH.

## **2.2. ¿Qué rol juegan las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras?**

Después del golpe parlamentario, se intensificó el modelo del agro negocio y la extranjerización, según opina Cyntia González de la CONAMURI: “Hay una inseguridad total porque ya no se sabe si estamos en nuestro país o el de quién, porque está lleno de brasileros, en el campo los brasileros son mayoría... y cada vez se respetan menos las pocas leyes que existen. Como dicen por ahí, ahora somos los que mandamos y punto!... También ocurre que ahora se promociona mucho más aquello de que en la ciudad está el desarrollo! Y como ahora la gente se quiere ir a cualquier parte para buscar trabajo, están todos desesperados...”. Para el MCP, las empresas multinacionales son las que controlan la riqueza y son las que tienen poder. Ven a Cargill, Monsanto, ADM y otros detrás del Golpe parlamentario, y tampoco descartan la intromisión de empresas nacionales.

Quintín Riquelme es contundente cuando afirma que el rol de las empresas nacionales y extranjeras es hacer desaparecer al campesinado. Nos recuerda que la agricultura campesina se caracteriza por la diversidad, porque en 10 hectáreas es posible cultivar todo lo que se consume. Pero el problema está en que el modelo de producción campesino no es compatible con el uso de químicos. “De ahí que, esta forma de agricultura, en nuestro caso la agricultura familiar campesina tradicional probablemente tenga que desaparecer. Creo que la estrategia de estas grandes empresas a mediano plazo es la desaparición de este tipo de agricultura, ¿porqué no hacen negocios con este tipo de agricultura?, ¿dónde está el negocio de ellos?”. Así también, considera que las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son un pretexto para maquillar o lavar la imagen de estas empresas, incluso utilizando a las ONG para eso. Con este pretexto, algunas empresas intentan difundir el modelo productivo empresarial a pequeña escala entre campesinos: “Para nosotros es un fracaso total... lo que nosotros encontramos es que una persona que tiene 10 hectáreas de repente mecaniza 8 hectáreas pero ¿qué hace con eso? Pues nada, porque ahí mató su piquete, mató su producción de consumo, su diversidad; no puede tener más vaca por que no tiene más espacio, en esas 8 hectáreas ya no puede entrar con machete y azada, por lo tanto necesita maquinaria que no tiene, la maquinaria tiene que contratar y el vecino que tiene maquinaria viene a trabajar en su chacra luego de terminar con su parcela. Otro problema detectado es que gente que tenía rubros como el Cedrón Paraguay los liquidaron, plantaron maíz y un año les salió bien, pero al otro año

vino la sequía y les fundió; además el maíz no tiene precio entonces quebraron. Lo que nosotros encontramos es que varios de esos productores están en *Inforcomf*, porque estas empresas canalizan el apoyo hacia instituciones privadas, bancos privados que no te perdonan”.

De esta manera, y con estas estrategias, en distritos como Capi'ibary y en la zona de Caaguazú, ciertas empresas están haciendo que desaparezca el modelo productivo basado en la diversidad y en la producción de alimentos básicos. En muchas comunidades se comenta que el campesinado va a desaparecer en 10 años si esto no se corta. A través de ONG formadas por las empresas se crea división, se da trabajo a los que apoyan a estas empresas. Al referirse a empresas extranjeras, Perla de la CONAMURI menciona que: “Ya son solo ellos los que mandan en la zona, ellos compran todo lo que existe, nuestros policías están a su favor y, como bien sabemos, en esta sociedad capitalista en la que estamos, es el que tiene más dinero el que manda, y aunque se movilice la gente en las comunidades o a nivel zonal, eso no se sabe, no se difunde; y ellos mandan reprimir nomás o hacen que la gente tenga miedo.”

### **2.3. ¿Qué rol juegan los gobiernos nacionales y territoriales?**

Quintín Riquelme afirma que en este momento el rol del Estado es básicamente favorecer políticas de apoyo a la gran agricultura, a la agricultura empresarial. Eso se vió claramente en este gobierno de Federico Franco y va en desmedro del (posible) apoyo a la pequeña producción campesina. Desde las organizaciones se pide básicamente al Estado asistencia técnica adecuada y mercados seguros, ya que la vida del campesinado es abandono e incertidumbre total.

Refiriéndose al rol que el gobierno juega en general, los dirigentes de la CNOICIP aluden a la falta de respuesta de las autoridades legalmente constituidas. Han intentado y probado las vías institucionales para denunciar y proponer soluciones pero las respuestas han sido siempre negativas, revelando la complicidad y parcialidad de las autoridades en cuestión: “como organización planteamos a los municipios para que se dicten ordenanzas municipales, o rescatar leyes bastante importantes que se pueden utilizar como referente pero lastimosamente hay complicidad en los municipios, entre Concejales, Fiscales, la Policía, todos están involucrados en esta cuestión de complicidad con los empresarios; de ahí que nadie ponga barreras de protección. Nos sentimos impotentes ante la posibilidad del desarraigo; y es que aquellos que no están bien preparados políticamente, cuando se les enferma la familia se ven obligados a alquilar y salir o vender definitivamente y, así los otros van entrando a las comunidades.”

Las dirigentes de CONAMURI comparten esta visión, y la fundamentan con el caso reciente de una dirigente de base que se enfrentó a situaciones de fumigación irregular. Ante su denuncia, la autoridad en cuestión le respondió: “¡bueno, cuando ustedes saben que ya van a fumigar,

salgan nomás de ahí; porque no hay nada que podamos hacer, tienen demasiada plata y no le vamos a poder atajar!”... En otro caso, la respuesta fue: “¡Acá no se pueden meter con fulano ni con mengano, porque nosotros no podemos controlarlos y ustedes mucho menos! Si nosotros que somos la autoridad política no tenemos fuerza sobre ellos, ustedes que no tienen ningún poder económico no tienen nada que hacer, o sea, mejor tranquilícense, cállense y aguántense nomás.”

Así pues, hay zonas en que la gente teme a los policías porque sabe que están en complicidad con los empresarios, son los que les dan garantía de que no habrá resistencia de las comunidades. Las de CONAMURI van más allá y denuncian una “complicidad absoluta por parte de las autoridades locales. El que se oponga al modelo sojero, sea autoridad o dirigente, recibe amenazas o se expone a una eliminación directa. En el caso de los dirigentes o las dirigentes campesinas hay una limpieza selectiva, silenciosa. En el caso de las autoridades es un poco más complicado para ellos, aunque hemos tenido dos o tres casos de autoridades o candidatos que fueron eliminados por sicarios y esto se hace con la complicidad de autoridades locales.”

Similar es la impresión desde el MCP donde se considera que las autoridades, de todos los niveles, juegan un papel muy importante en el avance del agro negocio, dirigiendo las políticas hacia las empresas transnacionales. Mientras tanto, no hay políticas claras de salud, de educación, y nunca traen beneficios para la gente. Critican el hecho de que representantes de los intereses del agro negocio se relacionan con las municipalidades y hasta con las fiscalías, que están preparadas para respaldarlos.

Dirigentes de CNOICP, de la región Itapúa destacan el papel que jugó Miguel Lovera como director del SENAVE durante el gobierno de Lugo. Recuerda que se hacían monitoreos y a los infractores se les ponía metas y un tiempo para cumplirlas, en muchos casos se recurría a multas también. A través de esos mecanismos se logró que se respetara un poco más la normativa vigente, “pero hoy en día eso ya no existe, el Director de la SENAVE es un feroz representante de los productos químicos y entonces están totalmente domesticados de vuelta... los pequeños productores que ya comenzábamos a exigir derechos con el respaldo institucional del Estado, hoy estamos totalmente huérfanos, no tenemos absolutamente nada, no tenemos autoridad. Así pues es muy serio el asunto, es una amenaza muy grande”.

#### **2.4. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación social?**

“Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, pero hay más medios en contra de las organizaciones campesinas que a favor. La propaganda pro soja arrasa en los medios de prensa escrita, radial y televisiva. Los medios alternativos, como las radios comunitarias, son aún muy débiles para contrarrestar estas fuerzas... No hay confianza en los medios de comunicación, son parciales y distorsionan los hechos con frecuencia. No están para favorecer nuestra lucha, nuestros reclamos; y si por ahí algún periodista lo intenta, se lo margina. Hay

como ordenes directas de no publicar ningún artículo a favor de la mayoría de la gente, que se moviliza por sus necesidades. Se critica el papel de los medios en la promoción del consumismo y a las dificultades para contrarrestar este tipo de ideología. Si acontece algo importante, ellos muestran otra cosa, para que no puedas ni mirar luego lo que está pasando, menos aún interpretarlo. Buscan desviar la mirada de la gente hacia donde a ellos les conviene.”

El caso Curuguay constituye un buen ejemplo del papel que juegan los medios en el no esclarecimiento de los conflictos agrarios, en la proyección de una imagen perversa de los campesinos, con lo que se busca justificar el abuso de la fuerza en su contra.

## **2.5. ¿Cuál es el contenido concreto de esas demandas, qué buscan, qué persiguen?**

El mayor objetivo de CONAMURI es la transformación social, contrarrestando al actual sistema, enfrentándolo con otro modelo: “en cuestión de producción la apuesta es por la agroecología y se lucha por la soberanía nacional, y eso incluye la soberanía territorial, el agua, nuestros montes, para que se pueda respetar nuestro medio ambiente en sí, porque en CONAMURI creemos que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella.”

La CONAMURI se ufana de haber “levantado las banderas en contra de los agro negocios, en contra de los agro combustibles, en contra de los transgénicos, y fuimos nosotras las que defendimos la bandera de la soberanía alimentaria como propuesta integral para contrarrestar ese modelo perverso”. También al optar por el feminismo, “nuestro campo de lucha y nuestras exigencias son más amplias y la mirada sobre nuestras reivindicaciones históricas tienen un nuevo enfoque.”

La defensa de sus comunidades de base ante el avance de la producción de soja es una de las preocupaciones de la CNOICIP. Pero no está claro en qué consisten las estrategias de defensa de la tierra... cómo evitar la venta de derecheras o de las propiedades con títulos.

La lucha más frontal de la CNOICIP en los últimos tiempos se relaciona con el impacto de la sequía. Es importante recordar que la deforestación y la transformación masiva del paisaje debido al avance de la frontera sojera tiene un impacto directo en el clima regional, agravando e intensificando aún más los efectos del cambio climático global. Ante una fuerte sequía la CNOICIP reivindicó kits de alimentos y semillas para recuperar las plantaciones. Se obtuvo con el concurso de otras organizaciones un apoyo de 1 millón de guaraníes (220Us\$) por cabeza de familia, para unos 200 mil campesinos.

Para los dirigentes del MCP una de las acciones más importantes es la creación del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA Guaraní), una escuela técnica de formación de ingenieros/as agro ecólogos de origen campesino, lo que esperan permitirá profundizar y

difundir prácticas agroecológicas entre comunidades campesinas, para revertir el tema de los transgénicos.

En el MCP hay un mayor interés de ocupar espacios políticos, al punto de haber disminuido acciones de ocupación de tierras. Apostaron al proceso electoral y consideran que ha dado sus resultados, al menos hay temas que pueden ser más discutidos a nivel de opinión pública, incluyendo la relación izquierda/derecha.

La unidad es otra de las líneas de acción para el MCP, y la novedad consiste en apostar a una unidad no de tipo coyuntural sino estratégica, para interactuar a nivel de modelos de asentamientos, producción y educación. Se busca inculcar en los jóvenes la idea que la tierra no es una mercadería sino un medio para el desarrollo humano.

## **2.6. ¿Hasta qué punto estos conflictos son una expresión de las dificultades del modelo actual modelo del producción y acumulación y tensan los límites de la democracia?**

Los transgénicos se sustentan en el sistema internacional de patentes, lo que permite que empresas transnacionales lucren con su comercialización y la de los paquetes tecnológicos asociados (maquinaria, agroquímicos). En Paraguay, país con un alto índice de población rural, la producción de variedades transgénicas destinadas a la exportación se hace a costa de la destrucción del medio ambiente e implica intoxicación y expulsión de comunidades campesinas e indígenas del campo.

Además, la alta rentabilidad de la actividad agroexportadora eleva el precio de la tierra, dificultando aún más el acceso a la misma por parte del campesinado. La utilización de transgénicos homogeneiza la producción agrícola, que es por naturaleza diversa y heterogénea, y lo anterior se sustenta en la mecanización y tecnificación del agro y tiende al predominio de medianas y grandes explotaciones agrícolas, intensivas en capital. Según el Censo Agropecuario Nacional 2008, el 31% de la producción de soja obtenida en dicha zafra provino de sólo 605 propiedades de 1000 a menos de 5000 hectáreas.

Aún cumpliendo con la normativa ambiental vigente en Paraguay, la coexistencia entre una producción extensiva, mecanizada, de variedades transgénicas diseñadas para ser dependientes de agroquímicos y una agricultura familiar campesina/indígena orientada hacia la subsistencia, y la seguridad alimentaria ya no es posible. En tal sentido, la promoción por parte de los entes estatales, de variedades transgénicas, condena al campesinado a desaparecer en las próximas décadas. Este conflicto es por lo tanto una expresión clara de las dificultades del modelo actual, compromete el desarrollo que hoy se quiere sustentable y equitativo y, tensa de manera aún impredecible los límites de la democracia.

La discusión actual, al momento de la redacción de este informe, sobre la creación de un “impuesto a la exportación de granos” o, en su defecto, “un impuesto sobre la producción con devolución del IVA...” no cambia radicalmente la situación. Es probable que dicho impuesto, si se concreta, ponga un freno al avance de la soja, aunque lo más probable sea que legitime su producción y genere un círculo vicioso, de promoverse programas sociales de tipo asistencial dirigidos al sector campesino e indígena en base a una actividad que perjudica en gran medida su calidad de vida y compromete su existencia como pequeños agricultores. Las posturas de las organizaciones campesinas no son similares y reflejan la tensión que este tipo de situaciones genera entre comunidades.

Ante la posibilidad de un impuesto a la soja (tema que se debate desde hace más de una década) las posturas son ambiguas y hasta contrapuestas. Hay un apoyo crítico y condicionado porque como dicen las de la CONAMURI, “creemos que es algo que está destruyendo nuestro territorio y nuestra forma de vida e incluso nuestra propia existencia está siendo afectada; no vamos a permitir que se financie cierta política que no va a compensar de ninguna manera, entonces nos entra la duda de si apoyar o no apoyar...”.

Hay ahora un reconocimiento de los límites de la incidencia política por parte de algunas organizaciones, lo que también las hace asumir ciertas posturas, sin que forzosamente exista pleno acuerdo o se considere que están dadas las condiciones para llevarlas a la práctica: “digamos que aprobamos como una medida paliativa, temporal, porque también entendemos que el sistema de Estado que tenemos, en este momento no está organizada para favorecer el modelo que desde las organizaciones campesinas e indígenas queremos desarrollar. Entonces, no tenemos la fuerza suficiente como para enfrentar ese modelo a nivel masivo y, las iniciativas que pretenden contrarrestarlo son mínimas. No tenemos la fuerza política suficiente para poder impulsar cambios estructurales desde el Estado, ni desde el Ejecutivo, mucho menos en el Parlamento y ni que decir desde el Sistema Judicial.”

Por su parte, ante lo sucedido con el Gobierno Lugo, pero también con la liberación ilegal de transgénicos y los retrocesos en materia de control y cumplimiento de la normativa que regula la aplicación de agroquímicos, algunas organizaciones se cuestionan sobre la pertinencia o existencia misma de una democracia... Consideran que con el Gobierno Lugo “hubo apertura y se quiso tratar el interés del pueblo, y nosotros forzamos, y eso es justamente lo que no gustaba, porque lo que colocamos nosotros como interés del pueblo era la cuestión de las tierras mal habidas, y eso no gustó a los dueños de la verdad. Y eso es lo que contribuyó para que caiga Lugo, y después de eso nuestro proceso retrocedió, no avanzó la apertura democrática, y para nosotros es un retroceso.”

## **2.7. ¿Hasta dónde las organizaciones y movimientos sociales que los llevan adelante tienen un horizonte de largo plazo y de cuestionamiento del modelo mismo, y hasta dónde proponen llegar?**

La reivindicación de la agroecología, que es común a la CONAMURI, el MCP, la CNOICIP y otras organizaciones, implica de por sí un cuestionamiento del modelo vigente o hegemónico. Algunos plantean que el movimiento ecologista es el único que tiene un horizonte de largo alcance, por ser el único que retoma la totalidad de los aspectos que hacen al desarrollo y a las sociedades humanas. En ese sentido, los movimientos que plantean la incorporación de las cuestiones socio ambientales a los DESC, incorporando lo ambiental, son los que miran más lejos. Las organizaciones campesinas, algunas más otras menos, tienen hoy en día reivindicaciones ambientales; ahora bien, el que éstas tengan un sustento en prácticas alternativas no está aún asegurado.

En la CNOICIP reivindican la agricultura agroecológica como única arma que puede garantizar el arraigo campesino, “pero sucede que la mayoría en el campo no somos gente de organizaciones, los que estamos en organizaciones tenemos esa meta, tenemos esa preocupación, tenemos esa campaña de concienciación a través de nuestra radio comunitaria. Pero hay propaganda en contra, hay mas fuerzas en contra que a favor; y es muy fácil, a raíz de la propaganda cae la gente”.

Ante la pérdida de soberanía alimentaria, Perla de la CONAMURI se lamenta en los términos siguientes: “En cuanto al patrón de consumo por ejemplo, mucha de nuestra cultura alimentaria se está perdiendo por la imposición de productos industrializados en detrimento del consumo de lo que nosotros mismo producimos. Hay comunidades, hay familias que producen muchísima naranja, pero venden la naranja para consumir gaseosa por ejemplo, entonces en ese sentido, acá mismo, nos encontramos a veces en contradicción y estamos en esa lucha”.

La CONAMURI también busca generar otro modelo de producción basado en la agroecología, así como un modelo de circulación y comercialización que transgreda el modelo supermercadista, el de la macroeconomía y de las transacciones internacionales. Ellas son ahora conscientes de la necesidad de cambiar incluso los propios patrones de consumo: “nosotros también tenemos que generar cambios, transformar nuestros patrones de consumo, nosotras mismas como CONAMURI, porque también somos producto de este modelo que nos impone una forma de consumir, una forma de ser, digamos como depositarios finales de un modelo de producción, no solo de alimentos sino de todo un sistema de producción”. En esta perspectiva, “nuestra apuesta pasa por transformar todos estos modelos y no es fácil cambiar un patrón de producción basado en una agricultura convencional con incorporación de muchos componentes de la agricultura empresarial pero a nivel micro; no es muy fácil porque hay propaganda, toda una ideología instalada en la mente de la gente y es lo más difícil de cambiar. O sea, son campañas ideológicas las que hay que promover para comenzar a cambiar esto”.

Una forma de enfrentar esta propaganda, mencionada también por las otras organizaciones, es a través de las variadas y pequeñas experiencias agroecológicas, que requieren de mayor difusión y apropiación. Por ahora, se señala la necesidad de hacer que las semillas nativas, por ejemplo, permanezcan en manos de campesinos e indígenas. Otra alternativa es la apuesta por cooperativas y asociaciones y se menciona también la comercialización asociativa.

Quintín Riquelme, al referirse a la Liga Nacional de Carperos, menciona que son muy difíciles de caracterizar ya que no hay manifestaciones abiertas ni a favor de la agricultura campesina ni en contra del modelo extractivista. En el caso de Teixeira “ellos dicen que tenían un programa de desarrollo rural para los asentamientos que iban conquistando, pero como no hay experiencia es muy difícil aseverar eso”. Lo caracteriza como un grupo “con un grado de identificación o de conciencia de clase muy diverso”, en cambio “cuando uno habla del MCP, de la MCNOC o de la FNC, vos sabés qué tipo de productores están ahí”.

## **2.8. ¿Qué estrategias o mediaciones han privilegiado y con qué resultados?**

Se abordan a continuación las estrategias más comunes de los movimientos que se incluyen en este análisis ante el avance del modelo agroexportador. A grandes rasgos, el movimiento campesino se caracteriza por ocupaciones directas de tierras y por las movilizaciones, además de la participación en política electoral. Por su parte, la CNOCIP organizó ferias de semillas nativas, en un primer momento con el SENAVE en tiempos de Miguel Lovera y, posteriormente, de manera independiente. En sus ferias participan estudiantes de agroecología y productores de diferentes puntos del país. Rescatan la importancia y el valor que tienen las semillas propias ante la incorporación de los transgénicos en los rubros de alimentación: “si el maíz es transgénico nuestra comida es transgénica y eso estamos peleando, no con mucha fuerza, porque también depende de la conciencia”. Sin embargo, resaltaron que “la única arma que tiene la CNOCIP y todas las organizaciones es salir a las calles”. Otra de las estrategias de esta organización es ahora también la denuncia jurídica formal ante las autoridades competentes.

Las dos estrategias básicas de la CONAMURI son la comunicación alternativa y el ejemplo, en base a campañas a favor del enfoque agroecológico. Consideran que contrarrestar la versión de los medios masivos de comunicación con otro tipo de comunicación, tratando otras cuestiones, dando otra versión de la historia, denunciando el ocultamiento y comunicando lo que realmente está sucediendo es una estrategia muy necesaria en este momento. Así también, consideran que el modelo agroecológico hay que desarrollarlo, llevando a la práctica lo que se critica a nivel discursivo. En este marco, tienen dos grandes campañas. La campaña por la “Soberanía Alimentaria” con varios componentes como semillas, agro tóxicos, transgénicos, etc. Y la campaña “Basta de Violencia contra la Mujer” que también busca atacar las causas de la baja participación femenina en cuestiones productivas. Según comentan, “estas campañas tienen mucho que ver con la cuestión de la comunicación y nos permite a nosotras llegar a una gran cantidad de gente, informamos a la gente. La gente cuando se informa tiene

elementos para contrarrestar la información que le da el otro medio; pero este trabajo necesita ser constante, porque si nosotros estamos entrando un minuto al día en la casa de la gente, la tele o la radio le tiene 10 horas comentando lo contrario, entonces es mínima nuestra capacidad de difusión y de incidir. Aunque no sé si sea tan mínima esa capacidad, también creo que tenemos un potencial inmenso”.

Desde la CONAMURI y con mucha anticipación a la repentina liberación, se promovió un “Proyecto de Ley de Protección de Variedades Locales de Maíz”. Consideran el caso del maíz como central en su lucha, ya que es una de las bases de nuestra cultura alimentaria y debería estar protegida ante todo tipo de amenazas. El ingreso del maíz transgénico pone en riesgo la misma existencia de las variedades tradicionales, como semillas criollas y otras semillas nativas de los indígenas, que son semillas de antiquísima adaptación al territorio, al clima y al suelo.

Al ser consultados sobre sus estrategias, el dirigente entrevistado del MCP fue el único que destacó la participación en espacios políticos electorales (aunque no sea el único movimiento con candidatos). Dos dirigentes del MCP fueron electos en abril del 2013 para la Concejalía Departamental en Alto Paraná e Itapúa. El primero de ellos murió acribillado por cuatro sicarios en la mañana del martes 2 de julio del 2013.<sup>29</sup> También tuvieron candidatos para el Parlamento pero no consiguieron los votos necesarios. Lo mismo sucedió con la candidatura a vicepresidente por el Frente Guazú, que recayó en Luís Aguayo miembro del MCP.

Varios dirigentes consultados consideran que la Liga Nacional de Carperos (LNC) fue utilizada por los liberales y colorados como una herramienta de control. Para algunos, los llamados carperos no constituyen un desafío porque los consideran una organización sin consistencia, sin raíces, que surgió en una coyuntura muy delicada, y que por lo tanto irá desapareciendo progresivamente, más aún si no tienen resultados... Algunos entrevistados caracterizan a los dirigentes de la LNC como oportunistas, mientras que otros dirigentes sostienen que el surgimiento de los carperos se debe a la desmovilización de las organizaciones tradicionales. En palabras de la CNOCIP: “nos sentimos un poco culpables de estancarnos como organizaciones nacionales, sobre todo en tiempos de Lugo. Como CNOCIP teníamos 65 comisiones vecinales de sin tierra, pero a partir de la asunción del gobierno de Lugo, nos quedamos más bien haciendo gestiones y ya no ocupaciones de tierra o salir a la calle. En verdad, teníamos miedo de que se concreten las amenazas de un juicio político a Lugo y creíamos que ése era el camino correcto; pero eso aprovecharon algunos para formar a los carperos.”

Al mismo tiempo, y algo contradictoriamente se reconoce que la LNC cumplió un papel que las propias organizaciones tradicionales abandonaron: “no solamente la CNOCIP sino la MCNOC, la ONAC, la CONAMURI y otras organizaciones nacionales hicimos la autocrítica, porque erramos

el camino. Más bien hubiésemos presionado más para ayudar al gobierno de Lugo, eso evaluamos nosotros; mientras tanto, los carperos ejercieron presión y pusieron en jaque al gobierno de Lugo...”

## **2.9. ¿Qué respuestas han conseguido? ¿Qué nivel de incidencia han tenido?**

En general, las respuestas obtenidas por el movimiento campesino como consecuencia de sus reacciones y reclamos ante la liberación de transgénicos fueron casi nulas. Las instituciones hicieron caso omiso de sus quejas fundadas y no dieron un paso atrás en sus decisiones y políticas. Peor aún, las reacciones y manifestaciones realizadas ante la liberación del algodón transgénico no impidieron que poco tiempo después se diera la liberación del maíz transgénico y otras variedades.

Hay quienes destacan como un logro importante la reacción masiva que hubo ante la cuestión de la liberación de transgénicos, fenómeno que se dio principalmente a nivel urbano, y se expresó a través de manifestaciones callejeras. También se valora “todo el trabajo de comunicación y denuncia, que frenó mínimamente el proceso”. Por ejemplo, como resultado de la audiencia ante la CIDH hubo una llamada de atención al gobierno de facto sobre lo que estaba sucediendo.

En términos de respuestas ante reclamos más amplios, el panorama no es más alentador. Sin embargo, existen algunos logros identificados por los propios protagonistas como fue el desembolso logrado como compensación de los daños ocasionados por la sequía: “eso se logró en la ruta, la conducción nacional estuvimos casi 4 meses haciendo gestión y no pudimos avanzar, pero al salir a la calle... en tres días conseguimos un acuerdo o compromiso firmado, eso fue por el mes de octubre del 2011, estaba todavía el gobierno de Lugo y logramos la compensación de 1 millón por familia luego de que caiga”. Sin embargo, la distribución de este beneficio fue politizada, incumpliendo los acuerdos sobre qué familias deberían ser beneficiadas, lo que impulsó a la CNOCIP a presentar una denuncia formal ante el Fiscal General del Estado “porque se estaban mal utilizando los recursos, beneficiando a liberales, muertos o jubilados.”

La estrategia jurídica tampoco ha dado los resultados esperados. El titular de la SENAVE, en cumplimiento de sus funciones, hizo más de 100 denuncias ante las autoridades competentes, las que “por cuestiones jurídicas se trancaron ahí”. Las violaciones de leyes ambientales, implican denuncias que no van a ninguna parte “porque en las cuestiones jurídicas está la mafia y ahí se defienden los grandes empresarios; pero por lo menos tuvieron (en el periodo de Lugo) un poco más de miedo, porque se les denunciaba realmente”.

Cyntia González, joven dirigente de la CONAMURI no oculta las complejidades y dificultades que su organización enfrenta: “La gente está cansada, cansada de trabajar en vano porque su

producción, la mayoría de las veces, no se da, porque su vecino también produce soja. En mi zona por ejemplo es maíz o tabaco, usan veneno y en el terreno de al lado ya no crece nada. La gente de ahora ya no produce en forma agroecológica y eso es lo que nosotros queremos plantear, queremos recuperar la forma de cultivar de antes”. Pero al mismo tiempo se sostiene que “la producción convencional campesina ya no da resultados, ni en cantidad ni en calidad. La gente busca soluciones a sus problemas concretos, y por eso la gente no tiene mucha receptividad ante los temas que toca CONAMURI, como la cuestión de la Soberanía Alimentaria, el rescate de semillas nativas, el combate a los agro tóxicos; eso apenas escucha la gente y ya lo ve como algo muy grande, fuera de su alcance o posibilidades”.

Sin embargo, se rescata la importancia de las campañas: “ese tipo de campaña si las hicieran más organizaciones, tendría mucho impacto, porque muchas veces la gente no tiene conocimiento y por eso se les juega; porque el conocimiento significa poder”.

Hay inicios de autocrítica, cuando la dirigencia campesina considera muy insuficiente el trabajo realizado por sus organizaciones, aunque difícilmente esta situación pueda superarse sólo con unión o articulación de esfuerzos de diferentes movimientos ni achacando de todos los males al sistema: “estamos insertos en un sistema y el sistema es una interrelación de tantos factores a la vez que deberían ser abordados simultáneamente y si no tenemos la capacidad suficiente para poder enfrentarlos entonces apretamos en un lado y se nos afloja en otro lado. Por ello creemos que la alianza y la articulación de los movimientos es muy importante”.

En la práctica, sin embargo, esta articulación resulta complicada, debido a las propias debilidades e intereses diversos que no siempre coinciden en el tiempo y espacio, y que hasta pueden ser forjados bajo el influjo de modas a veces inducidas, algo que se expresa como sigue: “cuando estábamos interesadísima en promover la agroecología, se nos presenta que la prioridad es la cuestión de la emergencia climática, que es cierto, es un fenómeno real y las otras organizaciones están ahí, entonces también nos vamos ahí y lo anterior queda otra vez como una cuestión secundaria... Ahora, el momento nos indica la necesidad de defender la cuestión democrática, que durante el gobierno de Lugo eso fue lo que hicimos, defender el proceso... La coyuntura también de alguna manera nos hace mover aunque no siempre en el sentido que queremos...”.

Los escasos resultados y el avance continuo de la soja sobre sus asentamientos está obligando a refocalizar el trabajo de las organizaciones en sus propias comunidades de base: “defender nuestras comunidades, eso es lo más importante para nosotros como organización. Vemos que donde hay más organización, menos entra la soja en las comunidades campesinas, y donde hay menos organización ahí avanza más la soja. Ellos (los sojeros) entran con créditos blandos, se promete una buena ganancia pero las familias ya no salen de cuentas e inclusive se les quita sus lotes por las mismas cuentas (CNOICIP) “.

Una percepción generalizada es que durante el Gobierno de Lugo se logró frenar el avance de la soja y frenar también la liberación de más transgénicos. Según los dirigentes, en ese periodo no se les hizo retroceder sino que sólo se les atajó y la tensión se fue acumulando “y siguió acumulándose hasta que cae el gobierno de Lugo y se viene como avalancha todo eso. Entonces la cuestión no pasa por frenar sino por transformar, por ir haciendo y empujando para el otro lado”. Sin embargo, en este ir haciendo sólo se insiste en que la fuerza popular organizada y articulada puede producir transformación.

Se menciona el caso de la Articulación Curuguaty como ejemplo de que es posible revertir una injusticia con la presión social organizada. Pero nuevamente se trata aquí de una cuestión de conflicto agrario, que tiene su propia dinámica y contradicciones, mas no de un modelo alternativo al agro negocio.

## **2.10. ¿Tienen la movilización y las propuestas una perspectiva de derechos individuales y colectivos, de género y de sostenibilidad?**

Desde la visión de Quintín Riquelme, la propuesta de desarrollo nacional que fuera consensuada entre todas las organizaciones campesinas en el año 2004 era una propuesta realmente completa. Por ejemplo, en relación a los derechos individuales y colectivos en lo relativo a la cuestión de la propiedad de la tierra, se consideraba la posibilidad de la propiedad individual, mixta y colectiva.

La perspectiva de género en la movilización y en las propuestas se debe en gran medida al trabajo y esfuerzo de la CONAMURI, que reivindica actualmente la bandera de la Vía Campesina, el socialismo y el feminismo. Y si bien hay mucho aún por hacer, es un avance que se sostenga que ya “no puede pensarse en los sistemas productivos sin esa mirada integral que el feminismo nutre”.

Para algunas líderes, en el espacio de articulación las propuestas de las mujeres no son consideradas o son más bien despolitizadas: “necesitamos ponerlas a prueba para que puedan ser abordadas como políticas”. Así pues, la instalación del tema de la lucha contra los agro tóxicos surge de la CONAMURI e inicialmente, fue considerado como “una cuestión de mujeres”, hasta que digamos por la insistencia se asume y lo instalamos en la agenda política; recién ahí los compañeros y compañeras de organizaciones lo toman en consideración, incluso el propio Estado”.

Ante el Estado, la CONAMURI reclama que las mujeres sean consideradas como productoras de alimentos, productoras de la vida de sus propias comunidades y familias. Sin embargo, se quejan de que el Estado no las considera como tales, ni el de Franco ni el de la época de Lugo.

En cuanto a la cuestión de la interculturalidad, con la COCIP se formó una mesa indígena nacional que intentó articular al movimiento indígena. Por su parte, los dirigentes de la CNOCIP consideran que los indígenas tienen otra realidad, diferente a la realidad campesina, pero eso no impide articulaciones como las que se dan a través de la COCIP, MCNOC, CONAMURI.

Ahora bien, es quizás en ciertos sectores del movimiento ambientalista donde se recogen algunos elementos de la sostenibilidad enraizada en la interculturalidad, al hablar de los “derechos de la naturaleza”, de los equilibrios recíprocos entre lo humano y lo no humano.

### **2.11. ¿Cómo afectan, o producen cambios en la institucionalidad (distinguiendo institucionalidad política, ambiental, territorial, etc.)?**

Para Alfredo Boccia: “El quiebre institucional ocurrido en junio partió en dos el año 2012. Lo convirtió en el año de la ruptura. No se trata solo de la interrupción política del mandato de un presidente y su substitución por otro, sino del brutal e inesperado corte de un proceso de construcción democrática que llevaba más de dos décadas. La frágil institucionalidad paraguaya ha recibido un golpe artero que destruyó ciertas certezas y reavivó fantasmas de nuestro pasado más violento. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cómo será el Paraguay del futuro? Esas son las preguntas con las que la ciudadanía termina este año vertiginoso, marcado indeleblemente por una sensación de pérdida y retroceso.”

Al analizar cuáles fueron y cuáles son las verdaderas condiciones de posibilidad de un cambio estructural o radical en materia de gestión de bienes naturales, patrimonio de todo el pueblo paraguayo, hay que considerar varios factores. Es necesario preguntarse hasta dónde se puede llegar con las instituciones que fueron creadas o reestructuradas, y cuáles son las leyes que deben ser objeto de modificaciones para que se pueda dar la posibilidad de cambios radicales. Se destaca en ese sentido, una coyuntura muy deficitaria en materia legislativa, y una correlación de fuerzas que refuerza la tendencia conservadora del actual Poder Legislativo. En las elecciones de abril del 2013, no solo ya no se recuperó el Poder Ejecutivo sino que las fuerzas progresistas tampoco avanzaron en el acceso a escaños en el Legislativo.

Durante el gobierno de Lugo se logró más presencia o protagonismo de instituciones como la SEAM, SENAVE, etc. Sin embargo, después de la caída de Lugo nuevamente se dio marcha atrás, en todo lo referente a la protección y regulación del uso de agroquímicos.

Para algunos líderes, como en Paraguay no hay ninguna política estable ni favorable a sus intereses, eso los lleva ahora a la lucha por espacios de poder. Consideran que la Fiscalía avala todo lo relacionado al monocultivo de soja, y junto con la Policía son una herramienta de control ante cualquier intento o movimiento que se interponga en el camino: “así es cómo este aparato que el pueblo sostiene, porque nosotros somos los que sostenemos a la Fiscalía, la Policía, pues bien, todos ellos juegan en contra nuestra otra vez. En la criminalización de los

luchadores uno de los papeles fundamentales lo tiene la Fiscalía; ahí están bien adiestrados, pase lo que pase el campesino tiene que ser el malhechor... esa es la misión de ellos. Y si sabes algo o viste bien todo, mejor no vayas a mirar o a decir que viste, tenés que decir que no sabes nada”.

Se ha destacado otro aspecto a tomar en cuenta al analizar los cambios institucionales, el de la existencia de bienes naturales en los territorios, es decir, más allá de la institucionalidad de una República, más allá de las leyes y de los gobernantes de turno, está la gente que puede soberanamente tomar decisiones. En ese sentido, hay integrantes de ONG que tienden a equiparar cooptación y exclusión, lo que tiende a confundir el escenario: “hay una estrategia de cooptación del movimiento social del campo, cooptación compulsiva o sea, expulsión, masacres, de todo, pero cooptación al fin y al cabo; o sea, cooptar como ocurrió en las reducciones indígenas, es decir, arrear, sacar gente de sus territorios soberanos para poder ocupar esos territorios. Y hoy hay quienes justifican el proceso de envenenamiento del campo, que expulsa gente, gente que soberanamente toma decisiones contrarias a los intereses hegemónicos y que por eso es sometida a envenenamiento”.

## **2.12. Proyecciones hacia el Gobierno de Cartes**

El presidente Cartes también es sojero y nunca mencionó la Reforma Agraria en sus discursos de campaña, solo habló de trabajo. Es aún muy difícil saber qué rumbos asumirá el gobierno de Cartes en materia agraria y de desarrollo rural. Varios analistas no ven ninguna posibilidad de que se apueste al menos a una mínima redistribución de la tierra, y mucho menos se espera acciones conducentes al rescate de la economía familiar campesina. Lo que sí puede preverse es el fortalecimiento de la agricultura empresarial, con un fuerte lobby de gremios como la UGP.

En la CNOCIP pronostican muchos conflictos en el campo vinculados con el avance creciente del cultivo de soja en los asentamientos campesinos. La CONAMURI teme que un aumento de los casos de asesinatos, es decir, un fortalecimiento del sicariato y la criminalización de la dirigencia campesina: “lo peor es que nuestra vida cada vez cuesta menos o tiene menos valor para ellos”.

El MCP espera un fuerte retroceso en el proceso democrático, lo que necesariamente implicaría cambios de estrategia y más articulación. Sin embargo, se anuncia que “nuestra gente va volver a realizar ocupaciones de tierra. Pero queremos una ocupación más estratégica, más colectiva, queremos hablar con la FNC y en otros espacios en relación a un modelo diferente. Nuestra línea de acción y reflexión va a incluir el eje tierras mal habidas-latifundio, porque la mayor parte de los latifundios es tierra mal habida, y eso se irá articulando o procesando de a poco”.

La coyuntura política posiblemente determinará la desaparición y el surgimiento de nuevas alianzas. Por ahora, es el Frente Social y Popular el que perdió fuerza y casi desaparece. Hay interés de las dirigencias en retomar ejes y actualizar documentos para lograr rescatar una visión integral y consensuada. También hay interés compartido en organizar un nuevo congreso social y político para elaborar líneas estratégicas de lucha y de posicionamiento frente al nuevo gobierno.

### **3. PRIMERAS CONCLUSIONES**

Paraguay sigue manteniendo un modelo económico extractivista totalmente dependiente de las exportaciones primarias. Como ya señalaba Zibechi, este extractivismo tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente. Además, según FAO es uno de los países del mundo con la tasa más alta de concentración de la propiedad rural. Como en otros Estado extractivistas, en Paraguay el poco dinero recaudado a través de los impuestos a la actividad agropecuaria es utilizado nuevamente para fomentar o subsidiar la consolidación del mismo modelo extractivista.

Si el alto crecimiento económico se contrastara con los costos reales, ambientales y sociales de este modelo, no quedaría duda que Paraguay debe abandonar el extractivismo y empezar a buscar una nueva estrategia de desarrollo. Este neo feudalismo, como lo calificaba Tomás Palau, sigue caracterizado por la herencia oligárquica y conservadora que lo marcó desde la Guerra de la Triple Alianza. La tierra sigue siendo la clave para el ejercicio del poder político.<sup>30</sup>

En relación a las políticas públicas o ausencia de ellas para regular proyectos o procesos que no respetan los DDHH, en primer lugar hay que destacar la ausencia de una ley y prácticas de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial podría establecer los criterios para el buen uso y manejo de bienes naturales y fijar los límites, para evitar decisiones arbitrarias por parte de propietarios. Así también, podría constituirse en herramienta que facilite la coexistencia entre sistemas productivos diversos a través de una zonificación adecuada.

En Paraguay se sigue considerando a las salvaguardas ambientales o socio ambientales como un freno al desarrollo y no como una oportunidad para la sustentabilidad ambiental y económica del país. Incluso se considera que las salvaguardas son herramientas para el chantaje a los inversionistas, en lugar de utilizarlas como herramientas para preservar nuestro futuro en base a la conservación de nuestro patrimonio natural.

---

30

Codehupy (2012): Yvypóra Derécho Paraguáiipe ..., Ob.cit.

### 3.1. Propuestas de incidencia

En pocas palabras, José Carlos Rodríguez expresa muy claramente la situación ante la que se enfrentan los movimientos sociales en Paraguay: “en este tiempo en que el país está desgarrado por la ruptura del contrato social democrático, vale la pena pensar que parte de lo perdido, en realidad, nunca lo habíamos obtenido. Esa carencia de ciudadanía, ese débil esfuerzo en defensa de ella misma, esa falta de movilizaciones masivas en defensa de la democracia, señalan que el cambio en realidad había sido muy despacioso y superficial.”<sup>31</sup>

Pero cabe preguntarse, cuáles son las vías de incidencia, ¿qué hay que reinventar, en donde hay que profundizar para que los movimientos puedan avanzar en la concreción de sus propuestas?

En relación a la liberación irregular de transgénicos, retomemos algunas recomendaciones concretas formuladas por Milena Pereira en el informe de la CODEHUPY del año de la ruptura:

- La restauración democrática es una condición indispensable para detener los retrocesos en materia de derechos humanos, experimentados sin pausa desde la destitución arbitraria del presidente constitucional por el Congreso de la Nación, el 22 de junio de 2012. Sin la misma, y sin una renovación considerable en ambas Cámaras del Parlamento, que posibilite la destitución por la vía del juicio político de la mayoría de los y las integrantes de la Corte Suprema de Justicia, así como la despartidización del sistema de designación de jueces y fiscales, parecerían inviables los objetivos de las recomendaciones planteadas a continuación.

– Presentar una acción de inconstitucionalidad, fundada en el artículo 38 de la Constitución Nacional, del derecho a la defensa de los intereses difusos, contra el decreto N° 9503 del 20 de agosto de 2012 y las resoluciones derivadas para su aplicación, que han habilitado nuevas semillas transgénicas sin el proceso legal obligado, sin contar con los dictámenes requeridos de las instituciones competentes que fundamenten la inocuidad y la licencia ambiental respectiva, así como su conveniencia para el desarrollo socioeconómico inclusivo y sustentable.

– Presentar una denuncia contra el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, por sus responsabilidades administrativas en la solicitud y autorización inconstitucional de nuevos eventos transgénicos, de manera que con posterioridad dicho funcionario pueda ser demandado civilmente por los efectos perjudiciales económicos, culturales, sociales y ambientales de estas medidas, debiendo indemnizar pecuniariamente por ellos, así como una eventual denuncia penal por hechos punibles, ya que la existencia de cuanto menos dolo eventual es innegable en las actuaciones señaladas. En cuanto al titular de facto del Ejecutivo,

---

31

Ibid.

Federico Franco, restituido el orden constitucional, debe ser denunciado por su responsabilidad en la emisión del decreto N° 9503 del 20 de agosto de 2012, y sus efectos.

– Conformar efectivamente el comité interinstitucional de evaluación de los efectos nocivos de los plaguicidas, establecido en el artículo 9, inciso o de la ley 2459/04 que crea el SENAIVE: “constituir, con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) y demás instituciones afines, comités de evaluación de los efectos nocivos de los plaguicidas para la salud humana, animal y vegetal y/o el medio ambiente.”

– La tarea urgente y prioritaria de dicho comité debe ser realizar un informe responsable que abarque la situación actual de los cursos hídricos, suelos, biodiversidad, así como del impacto en la salud humana de las personas que integran las comunidades rurales campesinas e indígenas expuestas a fumigaciones en toda la Región Oriental, sobre todo en los departamentos de mayor avance de cultivos transgénicos, incluyendo el estudio de las afectaciones a sus recursos alimentarios. Publicación del informe y adopción de una política de emergencia para proteger a las comunidades expuestas, reparar los daños causados e indemnizar adecuadamente a las personas afectadas.

– Concluir el catastro rural unificado y actualizado de las tierras del país, y difundir los datos descentralizadamente, utilizando tecnologías de punta.

Diseñar y evaluar una política coordinada de recuperación de extensas propiedades estatales ocupadas por poderosos empresarios, de tierras ilegalmente adjudicadas a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario, así como de lotes pertenecientes a colonias del INDERT asignados y ocupados por sujetos no beneficiarios de la reforma agraria.

Las ONG tienen un rol importante ante este panorama en el desarrollo y comunicación de los fundamentos de la legitimidad de reivindicaciones y reclamos societales. Si los conocimientos generados en el diálogo entre ONG y movimientos sociales no se difunden y permean hacia otros sectores, gran parte de este trabajo será en vano. Otro rol importante es constituirse como herramienta de contraloría, para ello se requiere de una ciudadanía organizada y capacitada para propósitos diversos.

La reivindicación de la agroecología, que es común a la CONAMURI, el MCP, la CNOICP y otras organizaciones, implica de por sí un cuestionamiento del modelo vigente o hegemónico, pero hay cada vez más conciencia de que eso no basta.

Las organizaciones campesinas, algunas más otras menos, tienen hoy en día reivindicaciones ambientales, el problema está en la práctica, el rescate, validación, difusión, y análisis

comparado que se impone a este nivel micro y zonal etc. requiere de apoyos diversos y cooperación de muchas maneras.

El apoyo a iniciativas que buscan poner en práctica los principios de producción, distribución y consumo de la agroecología es fundamental. Varias organizaciones consideran que la creación del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA Guaraní) es un ejemplo, esencial para cambiar el modelo de producción que se está imponiendo en nuestro país.

Además del apoyo concreto a centros de experimentación y enseñanza agroecológica, se puede promover las metodologías de enseñanza y aprendizaje conocidas como “de campesino a campesino”, que reconoce los conocimientos y la capacidad de la gente de encontrar soluciones a sus problemas a través del intercambio entre pares.

Finalmente, en cuanto a las estrategias de los movimientos sociales, se aspira a una combinación de ocupaciones, movilizaciones, campañas y denuncias. Ante un fuerte retroceso en el proceso democrático, se busca discutir sobre cambios de estrategia y, y de lo que se requiere y es posible para más articulación y unidad entre movimientos.

Ante el desenmascaramiento del sistema neo feudal o neo stronista en el marco del caso Marina Cué, un opción que parece o resurge como atractiva es la de hacer ocupaciones colectivas de latifundios de tierras mal habidas; opción también conflictiva, teniendo presente los antecedentes inmediatos y la necesidad de construir los recaudos necesarios para asegurar una asesoría jurídica adecuada, y una prensa consustanciada con la búsqueda de la verdad, indispensables para avanzar en estos frentes.

**Asunción, Julio de 2013.**